

**OPINIÓN PÚBLICA Y ESTIGMATIZACIÓN DE LA OPOSICIÓN DURANTE EL
GOBIERNO DE ÁLVARO URIBE VÉLEZ**

**TRABAJO PREPARADO PARA SU PRESENTACIÓN EN EL VIII CONGRESO
LATINOAMERICANO DE CIENCIA POLÍTICA, ORGANIZADO POR LA
ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE CIENCIA POLÍTICA (ALACIP).
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ, LIMA, 22 AL 24 DE JULIO DE
2015**

LAURA SALCEDO DÍAZ

laura_salcedo@live.com

Corporación Universitaria Americana

JULIÁN ANDRÉS LÁZARO MONTES

julianandreslazar@gmail.com

Universidad del Norte

Barranquilla, Colombia

2015

ÁREA TEMÁTICA : Participación, representación y actores sociales

Subárea: Conflictos armados, violencia política y paz

Resumen:

La democracia colombiana es percibida como una de las más saludables de América Latina, en vista de la cantidad de mecanismos de participación ciudadana que la caracterizan. Sin embargo, enmarcadas en el conflicto de profundas raíces socio-políticas y económicas que vive el país, se han configurado formas de *violencia política* a través de las cuales los grupos en el poder se han fortalecido y han limitado, cuando no neutralizado o anulado, la capacidad de acción de sus opositores.

Durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010) y en medio de un panorama de rechazo generalizado por parte de los colombianos a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), el mandatario desarrolló una estrategia de *estigmatización política* de sus opositores y detractores, así como de aquellos que de alguna manera se mostraban inconformes con sus políticas, que consistió en señalar supuestas relaciones o afinidades entre todos ellos y la insurgencia. Los señalamientos ante una opinión pública en la que existían altos niveles de aceptación del discurso del entonces presidente, construyeron un imaginario colectivo en el que estar en desacuerdo con sus políticas implicaba automáticamente una proximidad ideológica o simpatía con las FARC. El resultado fue el fortalecimiento de la figura mesiánica de Uribe y la consolidación de un entorno político altamente polarizado que hoy se mantiene, y que se constituye como una fuente de *violencia política*, bien sea por la negación consciente de la pluralidad ideológica en el país o bien por el accionar de grupos armados de extrema derecha contra opositores, líderes sociales o todo lo que representara alguna forma de alteridad indeseada.

Palabras Clave: estigmatización política, violencia política, pluralidad ideológica, discurso y opinión pública.

Antecedentes de estigmatización y violencia política en Colombia

Violencia política de los años treinta, cuarenta y cincuenta

El recurso de la estigmatización caracterizó a las luchas entre liberales y conservadores de la primera mitad del siglo XX, que arreciaron en los siguientes años al asesinato del caudillo liberal Jorge Eliecer Gaitán, ocurrido en 1948. Estigmatizar era particularmente útil para justificar la eliminación física del oponente político. Un ejemplo de ello se puede encontrar en los sermones que los curas, alineados en su mayoría con el Partido Conservador, daban a quienes asistían a los servicios religiosos, en los cuales se hacía referencia a los militantes del Partido Liberal como “comunistas y ateos” que destruían iglesias¹. De manera simultánea, los liberales construían imaginarios sobre los conservadores de los que se decía eran “malos” y “atravesados”², esto último en referencia a una supuesta actitud de intransigencia que hacía inviable cualquier forma de negociación o buena relación con los militantes del bando político contrario. Los estereotipos llenaban la cabeza de la gente sencilla de pequeñas poblaciones y zonas rurales, que fue donde se cometieron la mayor cantidad de crímenes durante el periodo conocido como la Violencia, sobre todo luego del asesinato de Gaitán, momentos en los cuales se incrementaron los niveles de confrontación³.

El resultado del esfuerzo estigmatizador, junto con otros elementos, fue el incremento de las acciones de violencia en muchas regiones del país, las cuales alcanzaron su punto crítico a partir del año de 1948, momento en el cual se recrudeció el accionar de los violentos de ambos

¹ Gustavo Álvarez Gardeazabal (2011) describe en su novela “Cóncores no entierran todos los días”, la dinámica del periodo de la Violencia en una población del Valle del Cauca. La obra fue llevada al cine y se centra en la vida de León María Lozano, un militante del partido Conservador que se hace célebre por llevar a cabo una serie de asesinatos contra dirigentes locales del partido Liberal. Una de las escenas recreadas en la película es la de un cura que desde su púlpito hace señalamiento sobre los liberales a los que acusa de “rojos” y “ateos”.

² Uno de los autores de este trabajo tuvo la oportunidad de entrevistar a uno de sus abuelos paternos, fervoroso defensor de las ideas liberales, quien expresó su percepción acerca de los “godos”, que era el apodo con que los liberales denominaban a los conservadores. La frase “malo igual a los godos” o “atravesao igual a los godos”, es de uso frecuente entre ciertas personas de avanzada edad partidarios del liberalismo en la región de los Santanderes, donde se vivió con particular fuerza la violencia política de mediados del siglo XX.

³ Algunos estudios hacen referencia a dos momentos del periodo conocido como la “Violencia”. Según esos estudios, el primer momento, que va de 1945 a 1953, en el cual los conservadores están en el poder, dejó una cifra de 159.000 muertos, en tanto que el segundo, el de la dictadura del General Gustavo Rojas Pinilla y los primeros gobierno de una coalición entre los bandos enfrentados, el Liberal y el Conservador, entre 1954 y 1966, dejó cerca de 35.000 muertos. (Oquist, 1978, p. 320 y ss).

partidos, y que abarcó aproximadamente un periodo de cinco años, hasta 1953, cuando, como una forma de respuesta a la violencia generalizada, llegó al poder el General Gustavo Rojas Pinilla, inaugurando la única dictadura en Colombia en el siglo XX, que poco años después fue reemplazada por una alianza entre políticos liberales y conservadores denominada “Frente Nacional”.

El “Frente Nacional” fue un blindaje que adoptaron las elites políticas tradicionales y que funcionaba por medio de una alternancia exclusiva y excluyente de poderes, cuatro años de gobierno para los liberales y cuatro para los conservadores, bajo la excusa de que era la mejor salida frente a la larga disputa que habían mantenido y que había derivado en violencia generalizada. El contexto de la Guerra Fría también sirvió a la élite política colombiana como argumento para defender el sistema de alternancia en el poder, puesto que este último proporcionaba estabilidad frente a la amenaza del avance del comunismo, el cual había tomado fuerza en algunas regiones del país, llegando incluso a convertirse en el sustento ideológico de una buena cantidad de organizaciones, entre ellas algunas campesinas de las cuales emergieron posteriormente núcleos de insurgencia, como sucedió con el caso de las FARC.

Las décadas del sesenta y setenta constituyen una parte de la historia de Colombia en la que se desarrollaron procesos de creación y consolidación de grupos guerrilleros que se enfrentaron a las fuerzas del Estado utilizando la violencia como un recurso para intentar materializar su propósito de llegar al poder. El Frente Nacional significó también un estímulo para la lucha armada, en un contexto internacional particularmente dinámico (toma del poder de los revolucionarios liderados por Fidel en Cuba, Guerra de Vietnam, etc.), debido a que se tenía la percepción (en gran medida acertada) de que el acceso al poder por la vía política pacífica estaba bloqueado por la alianza entre liberales y conservadores⁴.

⁴ Un hecho puntual reforzó la idea de la imposibilidad para cualquier movimiento político de acceder al poder por la vía política. Para las elecciones presidenciales del año de 1970 presentó su candidatura el general Gustavo Rojas Pinilla, al frente de un movimiento conocido como Alianza Nacional Popular (ANAPO), que se enfrentaría al Frente Nacional, cuyo candidato era (por efectos de la alternancia en el poder) el conservador Misael Pastrana Borrero. La jornada electoral se efectuó con aparente normalidad, pero con el latente riesgo para los partidos de la pérdida del poder de los partidos tradicionales, frente al populismo de Rojas Pinilla.

Estigmatización en tiempos recientes: el caso de la UP

Luego de décadas de desgaste en el conflicto entre grupos guerrilleros (FARC, ELN, EPL, M19, entre otros) y los diferentes gobiernos de Colombia, los años ochenta aparecieron como un momento propicio para generar unas dinámicas diferentes que acercaran a las partes enfrentadas, dando como resultado una aproximación entre el gobierno del presidente Belisario Betancourt y varios grupos guerrilleros. En el marco de estos acercamientos surge la Unión Patriótica, un movimiento político creado a partir de la iniciativa de algunos grupos guerrilleros, entre ellos las FARC y el ELN para, según afirmaban sus militantes, adoptar una estrategia política para llegar al poder contribuyendo de paso con la búsqueda de la paz. Algunas posiciones justamente escépticas frente a la postura de la guerrilla señalan que la apertura hacia canales de acción política no fue otra cosa que la implementación de la estrategia de “la combinación de todas las formas de lucha”, lo que encuentra su respaldo en el hecho de que el intento de participación en la política nacional se desarrolló de manera simultánea al fortalecimiento del aparato militar.

Con el tiempo y según palabras de sus propios militantes, la Unión Patriótica buscó establecer una distancia entre su movimiento y quehacer político y los grupos de extrema izquierda que habían tomado parte en su nacimiento, debido principalmente a que se incrementaron las acciones violentas en el país con la llegada de nuevos protagonistas, entre ellos los capos del narcotráfico, que entraron con la fuerza que les daba su rentable negocio en la dinámica del conflicto colombiano.

Pero a pesar del intento de la UP por tomar distancia con respecto a los insurgentes de extrema izquierda, al movimiento se le identificó siempre como el brazo político de la guerrilla, lo que en el contexto de la segunda mitad de los años ochenta significaba ser objetivo de los grupos violentos de extrema derecha o incluso de los narcotraficantes, algunos de los cuales le habían declarado la guerra a la guerrilla como consecuencia de los secuestros extorsivos que esta última había perpetrado sobre algunos de los familiares de los capos. Uno de los narcotraficantes más conocidos no sólo por su importante papel en el negocio de las drogas sino también por la crueldad con la que trataba a sus enemigos era Gonzalo Rodríguez Gacha, apodado “el mexicano” por sus marcadas inclinaciones por la cultura de México. Precisamente Rodríguez Gacha, declarado enemigo y en guerra con las FARC, se dedicó a perseguir y exterminar a

muchos militantes de la Unión Patriota que, como ya se ha señalado, cargaban con el estigma de su presunta articulación con la insurgencia.

Pero no fue solamente “el mexicano” quien, apeló al argumento de la UP como brazo político de la insurgencia. Grupos paramilitares en alianza con algunos miembros de organismos de seguridad del Estado tomaron parte en el exterminio del movimiento político, sobre todo desde 1986, cuando se evidenció un crecimiento significativo en la participación política de la Unión Patriótica al obtener destacados resultados electorales. El resultado final fue el asesinato de más de 3500 integrantes del movimiento, en tanto que muchos otros se exiliaron para escapar de la persecución.

Los crímenes sobre la UP se dieron en casi cualquier lugar del país donde estuviera activo y participando en los procesos políticos alguno de sus militantes. Los miembros del movimiento político no estaban fuera de riesgo en ninguna parte, puesto que los atentados se llevaron a cabo en zonas rurales o urbanas de grandes y pequeñas ciudades. El caso de la Unión Patriótica constituye uno de los ejemplos de estigmatización política derivada en violencia más representativos en la historia reciente de Colombia.

Antecedentes y contexto nacional e internacional del debate político colombiano

Negociaciones fallidas, pescas milagrosas, incremento en la inseguridad, tomas guerrilleras

Entre los últimos años del siglo XX y los primeros del XXI una buena parte de la población colombiana desarrolló un profundo sentido de animadversión hacia los grupos armados de extrema izquierda, principalmente hacia la guerrilla de las FARC, que acumuló méritos para despertar una ola de rechazo que derivó en los siguientes años en el respaldo de una parte considerable de los colombianos hacia una propuesta política que remarcaba la necesidad de utilizar la fuerza de las armas para neutralizar la amenaza que representaba la insurgencia. El abanderado de dicha propuesta y quien sacó réditos del incremento del accionar delictivo de las FARC fue el político antioqueño Álvaro Uribe Vélez (AUV), quien en 2002 se convirtió en presidente de la República de Colombia. Su línea discursiva política era una respuesta a los

requerimientos que hacía el país en materia de seguridad, su mensaje caló hondo y el resultado fue un notable respaldo de los electores.

A la llegada de Uribe al poder le precedió el periodo de gobierno de Andrés Pastrana, cuya gestión sigue siendo recordada por el intento de llegar a unos acuerdos con la guerrilla de las FARC a través de unos infructuosos diálogos llevados a cabo en una zona despejada de operaciones militares, en el municipio de San Vicente del Caguán. El desarrollo de las negociaciones con las FARC en el Caguán no despertó nunca confianza ni entre los grupos de negociadores ni entre la opinión pública, lo que se explica en gran medida por el hecho de que se intentó negociar en medio de las hostilidades, en un marco más que inapropiado generado en gran parte por las acciones de las FARC, entre ellas el secuestro, la extorsión, los ataques contra instalaciones militares y contra poblaciones, que generaban víctimas no sólo militares sino también civiles. Todo lo anterior tendía un manto de duda sobre los reiterativos y ya desgastados argumentos de la guerrilla, que solían estar acompañados por una actitud desafiante en las negociaciones que evidenciaban falta de compromiso en la búsqueda del fin del conflicto. Por su parte la guerrilla desconfiaba de las intenciones de paz del Gobierno, siendo que de manera simultánea se encontraba en ejecución el Plan Colombia, entre cuyos componentes esenciales estaba la repotenciación de las Fuerzas Armadas.

Si bien es cierto que las FARC eran grandes responsables del cultivo de la animadversión hacia su organización, existían otros elementos que terminaban de cargar el ambiente en contra de una salida negociada al conflicto. La “ligereza retórica” de algunos mandos militares y gobernantes regionales amplificada por los medios de comunicación terminaba por echar más leña al fuego.

Al final las negociaciones entre las FARC y el Gobierno no dieron resultados y sobre ese fracaso y sobre el contexto ya expuesto caracterizado por un incremento en las acciones delincuenciales de la guerrilla se levantó la figura de AUV, quien en su slogan “Mano fuerte, corazón grande” sintetizaba su propuesta de adoptar una línea dura frente a la insurgencia. Los resultados no se hicieron esperar, en gran parte como resultado del desarrollo del Plan Colombia, que, como ya se señaló, tenía como componente fundamental el fortalecimiento de las Fuerzas Armadas, y de la adopción de una estrategia mucho más agresiva e intensa enfocada en mejorar las condiciones de seguridad en el país.

De igual manera se dio un retorno del Estado, a través de sus instituciones, a muchos lugares del país donde había estado ausente. Por ejemplo, la Policía Nacional volvió a hacer presencia en cerca de 250 municipios del país que habían permanecido en manos de la guerrilla o de otros grupos al margen de la ley durante meses⁵, e incluso años, lo cual renovó la confianza en las instituciones y le dio razones a la población de muchos de estos lugares para confiar en la gestión de Uribe Vélez.

En la misma línea de acción, las Fuerzas Armadas penetraron en zonas de difícil acceso en la selva colombiana, al sur del país, cruzadas por ríos como el Caquetá o el Guaviare, donde la insurgencia y otros grupos relacionados con el tráfico de drogas campeaban sin ninguna forma de amenaza para sus actividades delictivas. También se crearon brigadas móviles y batallones de alta montaña, que contaron con el apoyo de nuevos equipos y armamento, así como el acompañamiento por aire de helicópteros y aviones con tecnología de visión nocturna que redujo considerablemente la capacidad operativa de la guerrilla en sus operaciones.

11S y discursos globales contra el terrorismo

El contexto internacional de principios del siglo XXI estuvo marcado por el ataque a las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001, lo que derivó, en gran medida por la cobertura mediática del 11-S, en una actitud de rechazo frente a las distintas formas de terrorismo a nivel mundial. Colombia no fue ajena a estas circunstancias y rápidamente se adoptó el discurso antiterrorista global que, dadas la amplitud de características que permiten definir al terrorismo, permitió asociar el accionar de la guerrilla de la FARC con las lógicas de los terroristas internacionales.

Colombia, que había venido siendo un aliado importante de los Estados Unidos en América Latina, reafirmó su compromiso con la potencia norteamericana, que encontró en Uribe un adepto de la causa de la lucha contra el terrorismo, y cuya tendencia política conservadora lo acercó notablemente a la posición del presidente republicano George Bush. A lo largo del primer gobierno de Uribe la relación colombo-norteamericana fue cada vez más sólida, a lo cual

⁵ Un titular del diario *El Tiempo* se señalaba haciendo referencia al departamento del Meta que existían “11 municipios sin Dios ni Ley” y ampliaba la noticia afirmando que “A medida que se ha ido intensificando el conflicto armado en el Meta ha aumentado el número de municipios que han quedado sin la protección de la Policía Nacional y el Ejército.” (El Tiempo, 5 de octubre de 1999).

contribuyó la actitud intransigente con respecto a Estados Unidos asumida por mandatarios de países como Venezuela o Ecuador, todo lo cual hizo de Colombia el aliado por excelencia de Norteamérica en la región. En el año de 2008, es decir, durante el segundo mandato de AUV, el diario colombiano *El Tiempo* titulaba citando a una portavoz de la Casa Blanca que “Colombia es un aliado estratégico de Estados Unidos”. El pronunciamiento de la funcionaria se daba como consecuencia de una de las visitas de Uribe a Washington en septiembre de 2008, señalando además que se tiene como propósito “reducir la violencia e incrementar la paz y la seguridad en Colombia, y el fortalecimiento de la democracia en toda la región” (El Tiempo, 5 de septiembre de 2008).

La política de seguridad a nivel interior adoptada por el presidente Uribe así como el respaldo de los Estados Unidos le aseguró al mandatario el apoyo de varios de los más importantes gremios de empresarios del país. Un ejemplo de ello fueron los ganaderos, quienes encabezados por el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos, José Feliz Lafaurie, expresaron su apoyo a la intención de ir por una nueva reelección de AUV cuando este se encontraba ejerciendo su segundo mandato. El respaldo fue dado XXXI Congreso Nacional de Ganaderos, a final de noviembre de 2008 (El Tiempo, 28 de noviembre de 2008).

El estigma de estar en desacuerdo con el Gobierno

La construcción de imaginarios para el consumo de la opinión pública

Para Fabio López (2014), quien se ha ocupado de estudiar en detalle el uso de los medios de comunicación por parte del gobierno de Uribe para direccionar los afectos de los colombianos, los logros alcanzados en materia de seguridad derivaron en una actitud de buena parte de la población colombiana caracterizada por “un optimismo irracional y muchas veces ideológico, acrítico en su no deseo de ver las deficiencias, errores y problemas, intolerante frente a quienes expresaban críticas e inconformidades” (López, 2014, p. 125).

En la aceptación casi irrestricta de buena parte de la población colombiana de las tesis de Uribe jugaba un papel muy importante la construcción que se había hecho de su figura pública,

en la que convergían elementos que los colombianos percibían como propios, tradicionales, como por ejemplo el apego al trabajo o el valor de la familia, expresado muchas veces a través de frases paternalistas que el entonces presidente utilizaba y que daban lugar a otro rasgo que despertaba las simpatías de la gente: su capacidad para ser percibido, a través de sus maneras y sus palabras, como alguien común y corriente, cercano a cada uno de los gobernados, muy distintos a la imagen proyectada por anteriores presidentes a los que justamente la opinión pública relacionaba con élites gobernantes encerradas en urnas aristocráticas.

Uribe se legitimaba como gran gobernante ante el ciudadano de pie a través de múltiples mecanismos, como los consejos comunitarios, que servían de escenario para que los ciudadanos de a pie llevaran ante altos funcionarios regionales y nacionales algunos de sus principales problemas, lo que les daba una sensación de cercanía con los órganos centrales. En apariencia los consejos ayudaban a dinamizar procesos que el excesivo centralismo de Colombia dejaba sin atender o dilataba en las distintas regiones, pero realmente atentaba contra la planeación a escala nacional.

Precisamente, en un intento por reforzar la idea de cercanía con los sectores populares de la sociedad colombiana y con las regiones, Uribe en un consejo comunitario de febrero de 2007 lanzó unas expresiones en contra de ex presidentes, estableciendo una distancia entre la forma en que estos gobernaron y su estilo:

Los fines de semana los ocuparé en resolver los problemas en las regiones del país y no en hablar de los contradictores. Por eso, este gobierno no se queda en las capitales los sábados y domingos en tertulias de whisky o hablando mal de la gente. Las tertulias de este gobierno son con el pueblo para reivindicar a los pobres y construir un país justo. (Redacción Política, 31 de mayo de 2008, p. 10)

Para la construcción de una figura próxima a la sensibilidad popular fueron fundamentales desde un comienzo los medios de comunicación, a los cuales Uribe posteriormente siguió recurriendo para elaborar unas representaciones de la realidad colombiana ajustada a su visión y desde las cuales poder operar sobre la opinión pública del país. A mediados de 2008 la Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República preparó un manual de estilo destinado a los medios de comunicación y a las facultades de esta área, con el supuesto fin de unificar criterios con

respecto a la forma como se debían presentar las noticias difundidas por fuentes oficiales, aunque de lo que realmente se trataba era de modelar unos discursos a través del uso constante e incorporación de términos ajustados a la visión particular de Uribe acerca del conflicto colombiano (López, 2014).

Estigmatización de las expresiones de resistencia al discurso oficial

Contando con una simpatía masiva producto de su carisma y habilidades comunicativas, y también con la posibilidad de difundir su mensaje a través de los medios de comunicación alineados con el oficialismo, Uribe Vélez se encontró en una posición desde la cual generar representaciones con un alto poder de arraigo en la opinión pública de los colombianos, llegando a ser en la práctica un referente de opinión para muchos que lo consideraban un salvador para el país.

En una clara estrategia por llegar a amplios sectores de una sociedad como la colombiana, con bajos niveles de lectura y con una escolaridad altamente deficiente, Uribe utilizó con frecuencia el recurso de la simplificación de la realidad, presentándola sin matices, en términos maniqueos, donde él mismo, sus allegados y todos los que adherían a su visión política se autoproclamaban “colombianos de bien”, distantes y claramente segregados de quienes opinaban diferente o se mostraban críticos frente al régimen.

Los indígenas del Cauca en 2008 decidieron salir a protestar exigiendo el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado de hacer respetar los derechos de los grupos étnicos sobre las tierras en las que habían permanecido por siglos, y que en los últimos años habían venido siendo despojadas por terratenientes y grupos armados ilegales (El Tiempo, 14 de octubre de 2008). La marcha indígena se movilizó por la carretera Panamericana y terminó en enfrentamientos con la Policía enviada a disolver la protesta, con saldo de dos manifestantes muertos y la posterior negativa de cualquier responsabilidad de las autoridades en las muertes. La vía expedita utilizada por Uribe para deslegitimar la protesta indígena fue señalarla de estar infiltrada por la guerrilla. Es difícil establecer con precisión el nivel de veracidad de las afirmaciones de Uribe, puesto que, si bien es cierto algunas de las zonas desde donde provenían los manifestantes han contado tradicionalmente con presencia guerrillera, se hace complicado determinar con precisión si existían o no tales infiltraciones, frente a lo cual resulta a todas luces

irresponsable hacer acusaciones en ese sentido, sobre todo por parte de una figura pública como lo era el presidente, con altos niveles de popularidad e influencia sobre una gran parte de la población, incluyendo grupos armados de extrema derecha para los cuales las más distintas formas de manifestación de descontento o de lucha popular eran vistas como acciones enmascaradas de la guerrilla.

Muchas ONG's también se convirtieron en objetivo de los señalamientos de Uribe Vélez, de las que afirmó desconociendo las distintas posiciones políticas entre ellas, de ser, cuando menos, simpatizantes de las FARC y de servir de canales de difusión del terrorismo en el exterior. Particular molestia generaron los pronunciamientos de Human Rights Watch en los que la organización expresaba en un informe anual su desacuerdo con la versión del Gobierno acerca de los progresos en la protección y defensa de los Derechos Humanos en Colombia, sobre todo porque, según señalaba la ONG, el mismo Uribe torpedeaba los esfuerzos de la Corte Suprema por investigar el fenómeno de la parapolítica, en el que incluso se había visto implicado su primo, Mario Uribe (El Tiempo, 31 de enero de 2008).

Similar reacción había generado un informe producido por algunos académicos, titulado “El conflicto, callejón con salida”, desarrollado con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y en el que se sostenía la necesidad de llegar al término del conflicto a través de negociaciones en vista de la incapacidad de los actores armados de reducir de manera absoluta a su oponente o de conseguir una victoria definitiva, todo lo cual iba en contra de la línea de acción y de discurso de Uribe (López, 2014, p. 218). Por razones similares el grupo de académicos, líderes políticos, periodistas y otros, denominado “Colombianos y Colombianas por la Paz” fue señalado en febrero de constituir el “bloque intelectual de las FARC”.

Referencias a algunos casos específicos de estigmatización

Como ya se mencionó, el periodismo se subordinó a las directrices de los grupos económicos propietarios de los medios de comunicación, sirviendo estos últimos en la mayoría de los casos como caja de resonancia del régimen y desarrollando un cubrimiento noticioso ajustado a la agenda propagandística del Gobierno. Hollman Morris, fue de los pocos periodistas que asumió una actitud alejada de las posiciones de casi la totalidad de los periodistas en Colombia, lo que le

significó una serie de acusaciones acerca de posibles vínculos, si no orgánicos, por lo menos ideológicos con la insurgencia.

Durante una operación de entrega de secuestrados por parte de la guerrilla de las FARC a principios de 2009, el entonces Ministro de Defensa Juan Manuel Santos acusó a través de una entrevista radial al comunicador Morris de hacerle apología al delito señalando que el periodista “era parte del show que estaba montando las FARC [...] estaba haciéndole algún juego a las FARC, había sido llamado por las FARC y estaba entrevistando a los secuestrados antes de que llegaran por ellos” y complementaba señalando que “[los liberados] dicen que esas entrevistas fueron libretadas... que si no dicen esto o aquello entonces los iban a cambiar por otros”. El papel de los medios de comunicación en la difusión de los mensajes del Gobierno de Uribe y en la construcción de un discurso acerca de la figura de Morris iba más allá de la transmisión de la información, lo que se percibe en las preguntas direccionadas de Darío Arizmendi, de la cadena de noticias Caracol, que es quien entrevista al Ministro Santos e indaga acerca de la ubicación del periodista: “¿Él está detenido o se quedó en la selva con la guerrilla?”. A lo que el Ministro responde: “Él está con la Defensoría del Pueblo en el Caquetá” (El Espectador, 3 de febrero de 2009). La pregunta planteada por Arizmendi contiene dos posibilidades de respuestas sugeridas por el periodista, una de ellas que pretende indagar acerca de si Morris está detenido, en razón de una supuesta conducta delictiva, y la otra de “si se quedó en la selva con la guerrilla”, tipificando también en este caso un comportamiento al margen de la ley. Para infortunio del entrevistador, el Ministro de Defensa, anuló con su respuesta las dos posibilidades.

Otro periodista que definió una posición crítica con respecto al régimen de Uribe fue Daniel Coronell, a quien en 2002 el entonces recién posesionado presidente colombiano acusó en de tener nexos con el narcotraficante Justo Pastor Perafán, señalamiento que fue reiterado por los hijos de Uribe en mayo de 2012 (Uribe, T., y Uribe, J., 28 de mayo de 2012) en un intento de responder deslegitimando a las acusaciones que Coronell hizo en una columna titulada “El Rompecabezas” (Coronell, 26 de mayo de 2012), en la que hacía referencia a la adquisición de los hijos de Uribe de unos territorios que posteriormente fueron convertidos en zonas francas, incrementando millonariamente su costo, lo que terminó favoreciendo a los nuevos propietarios. Evidenciando un rigor investigativo notable, soportando sus afirmaciones en pruebas documentales, Coronell se ha destacado como uno de los periodistas investigativos más

destacados del país, capaz de enfrentarse a la maquinaria mediática del régimen con argumentos elaborados a partir de evidencias contundentes, frente a lo cual la retórica uribista estigmatizadora ha girado en torno a los supuestos nexos del periodista con el narcotráfico, versión difundida tanto por las principales voces del régimen como por sus seguidores en las redes sociales o en los foros de debate de los artículos publicados por Coronell.

Otro objetivo de los señalamientos del régimen de Uribe ha sido el Polo Democrático Alternativo, movimiento constituido por un grupo de políticos relacionados con la izquierda democrática, por ex militantes de la guerrilla del M-19 y por adeptos de tendencias políticas diferentes a los tradicionales partidos Liberal y Conservador. El Polo se ha ubicado desde su creación (oficialmente en 2005, pero con antecedentes de alianzas de grupos de izquierda que datan de 2002) en una línea política desde la cual ha ejercido como oposición al oficialismo, que ha sido básicamente el uribismo y los partidos que han hecho parte de la coalición alrededor de la figura de AUV. En un consejo comunitario del 3 de febrero de 2007, haciendo referencia al Polo Democrático Alternativo (PDA), Uribe dijo que “pasaron a ser terroristas con camuflado a terroristas de civil” (Redacción Política, 31 de mayo de 2008).

En esa misma línea discursiva aparecen varios de sus ministros, como Diego Palacios ministro de Protección Social y hoy condenado por el escándalo de la compra de votos de parlamentarios para aprobar la reelección de Uribe. Palacios (como se citó en López, 2014), dijo en una entrevista al diario *El Tiempo* que:

La izquierda lleva mucho tiempo buscando desinstitucionalizar al país. Desde cuando, por plata de los narcotraficantes, asesinaron a la Corte Suprema en la toma del Palacio de Justicia. Eso lo hicieron quienes quieren representar a la izquierda colombiana. Esos mismos que, para ser reintegrados a la vida política, no sólo recibieron ayuda y dinero del Estado, sino que no les tocó confesar ni reparar. (López, 2014, p. 127)

En la frase citada, al referirse a quienes “no les tocó confesar ni reparar” Palacio apunta directamente a aquellos miembros del Polo Democrático ex integrantes de la guerrilla del M-19, que pasaron por un proceso de indulto en el marco de las desmovilizaciones de principios de los noventa.

En su labor de oposición al oficialismo el PDA estuvo acompañado de otros políticos, principalmente del Partido Liberal, entre los cuales se destacó la ex senadora Piedad Córdoba, quien se ocupó de investigar y denunciar los vínculos de algunos políticos uribistas con grupos de extrema derecha. Así entonces, hacia el año 2008, los senadores Piedad Córdoba, por el liberalismo, y Gustavo Petro, por el PDA, fueron acusados por el en ese entonces presidente Uribe, de manipulación de testigos en los casos que se seguían contra parlamentarios de su bancada señalados por tener alianzas con grupos paramilitares (Tiempo, 12 de agosto de 2008). Los señalamientos iniciales ante los medios fueron reiterados en un consejo comunal en Rionegro, Antioquia, "me preocupa la posible manipulación de testigos por parte de Piedad Cordoba y Gustavo Petro", quienes según el presidente estarían buscando "perjudicar a personas que están involucradas en estos casos" (Tiempo, 11 de agosto de 2008).

En declaraciones a la prensa colombiana, Uribe mencionaba una situación en la que, estando de visita en Cali con motivo de acompañar a las víctimas de un atentado el 31 de agosto de 2008, uno de los afectados le agradeció su presencia en el lugar y le señaló la actitud de una senadora, en clara referencia a Córdoba, que decía que las bombas las había puesto el gobierno y que esa misma parlamentaria les sugería que se incorporaran a las FARC (El Tiempo, 6 de septiembre de 2008).

Ante las gestiones de Piedad Córdoba ante las FARC para tratar de conseguir la entrega de secuestrados por parte de esta guerrilla, a finales de 2008, el entonces presidente Uribe señaló en uno de sus consejos comunitarios que "...las FARC ahora, con el apoyo de una dirigente política, nos están tendiendo una nueva celada. El Gobierno está informado de que ahora están tramando una nueva liberación humanitaria [...] Por anticipado lo decimos: no lo aceptamos" (El Tiempo, sábado 6 de diciembre de 2008).

En cuanto a Gustavo Petro, Uribe hacía permanentes referencias al pasado de guerrillero del parlamentario en un intento por deslegitimar ante la opinión públicas las investigaciones que este último estaba llevando a cabo sobre los vínculos de políticos, la mayoría de ellos uribistas, con grupos paramilitares. A principios de mayo de 2008 y a través de un noticiero nacional, Uribe afirmó refiriéndose a Petro y a León Valencia, otro ex guerrillero que ha llevado a cabo investigaciones sobre "parapolítica", que "ellos nunca dijeron la verdad", "ellos nunca repararon

a las víctimas” (Emisión de las 7.00 p.m. de Noticias RCN en la que Uribe hace esta declaración, en: López, 2014, p. 248).

Sucesos posteriores concedieron a Uribe una victoria sobre Piedad Córdoba: la senadora fue destituida e inhabilitada por un periodo de 18 años en septiembre de 2010 por la Procuraduría General de la Nación, bajo cargos de colaboración con las FARC, según los análisis del ente acusador basados en documentos encontrados en el computador del jefe guerrillero Raul Reyes, incautado por las autoridades colombianas en el lugar donde fue dado de baja el guerrillero en una operación de las Fuerzas Armadas. Dichos documentos, según señalaba el Procurador General, daban a entender cierta comunicación entre Córdoba y la guerrilla de las FARC (Semana, 27 de octubre de 2010), donde se hacía referencia a la ex senadora con el alias de “Teodora de Bolívar”.

Por otra parte, Gustavo Petro fue posteriormente elegido alcalde de Bogotá, cargo que sigue ejerciendo hasta el día de hoy, aunque en medio de profundos cuestionamientos por el inadecuado manejo de ciertos temas de la ciudad, causados en gran medida por el boicot por parte de algunos grupos económicos con los que entró en franca disputa por arrebatarles ciertos monopolios, pero también por la poca previsión que tuvo frente a las reacciones de dichos grupos. Es importante señalar que Petro fue también destituido de su cargo por la Procuraduría (en una decisión bastante controvertida y que generó rechazos desde muchos sectores políticos del país, algunos de ellos no afines a Petro) pero el fallo se emitió cuando su periodo de gobierno se encontraba bastante avanzado, por lo que los traumatismos y la inutilidad de una nueva elección para un breve periodo de tiempo, así como algunas maniobras legales del alcalde, han permitido que se mantenga en el poder (Semana, 13 de enero de 2014).

La Corte Suprema de Justicia también se convirtió en opositora del mandatario al no estar dispuesta a seguir de manera irrestricta su línea de acción. En julio de 2007 Uribe afirmó que los magistrados de dicha Corte tenía un sesgo ideológico al no admitir que les fuera reconocido a los grupos paramilitares un estatus de sediciosos. Tres meses después el mismo Uribe acusaba a un magistrado de la Corte de ofrecer beneficios a un criminal apodado “Tasmania” para que lo involucrara en un crimen. Luego, en junio de 2008, cuando la Corte afirmó que en la aprobación del proyecto de reelección se había configurado un delito de cohecho, Uribe afirmó que esta instancia aplica una “justicia selectiva” (El Tiempo, 27 de junio de 2008). Estos señalamientos

acerca de sesgos ideológicos o selectividad en la aplicación de la justicia, entre otros, emanados de una figura pública como el entonces presidente, fueron vistos por buena parte de la opinión pública como formas de oposición injustificada a la política de Uribe, llegando en algunos casos a afirmarse en foros de internet o redes sociales que la Corte simpatizaba con las FARC.

La descalificación como herramienta de defensa

En respuesta a las investigaciones sobre nexos con los paramilitares que se abrieron sobre un buen número de senadores de su bancada, Uribe señaló que uno de esos parlamentarios “sintió que le estaban pidiendo plata de un sector de la justicia”, en un intento por dejar sembradas inquietudes acerca de los verdaderos propósitos de los entes acusadores (Tiempo, 12 de agosto de 2008). Frente a esta situación el expresidente liberal Cesar Gaviria salió en defensa de la Corte Suprema de Justicia, organismo encargado de las investigaciones por parapolítica, señalando que el presidente Uribe “debe ser respetuoso de la separación de poderes, de la colaboración armónica entre los mismos y no debe propalar especies que más parecen vagos rumores que acusaciones contra el actuar de la corte” (El Tiempo, 15 de agosto de 2008).

La posición del expresidente Gaviria motivó nuevos señalamientos de Uribe Vélez, señalando que en el pasado cierto gobierno (en referencia al de Gaviria) se había aliado con el grupo criminal de los “Pepes” para combatir a Pablo Escobar, ante lo cual el antiguo Ministro de Defensa del gabinete de Gaviria, Rafael Pardo, respondió que “desprestigiar a ciudadanos desde la Casa de Nariño es un atentado contra el Estado de Derecho” (El Tiempo, 27 de agosto de 2008).

A sabiendas del apoyo masivo que recibía el presidente Uribe por parte de un considerable número de colombianos, la coalición uribista decidió durante su primer mandato (2002-2006) presentar una propuesta que, haciendo un cambio en las condiciones ordinarias de elección presidencial, habilitara a su líder para aspirar a un nuevo periodo de gobierno, como efectivamente lo hizo, para salir elegido por cuatro años más, es decir para el periodo 2006-2010. Luego de un tiempo y cuando ya Uribe se encontraba ejerciendo su segundo mandato, se revelaron algunas irregularidades del proceso de aprobación de la propuesta, destacándose el hecho de que el apoyo de algunos de los parlamentarios encargados de aprobar o rechazar dicha propuesta fue comprado con prebendas tales como cargos públicos que podían manejar a su conveniencia. El escándalo se conoció como la “Yidispolítica”, en referencia a Yidis Medina, parlamentaria auxiliar que votó en favor de la propuesta reeleccionista luego de que dos de los principales ministros de Uribe le ofrecieran ciertos cargos que ella podría utilizar a su acomodo. Una vez caída en desgracia por la revelación del truculento proceso en el que tomó parte y en la medida en que Yidis Medina empezó a dar detalles de la operación para salvar la reelección,

empezó a ser blanco de los ataques del presidente Uribe y de algunos de sus ministros, que intentaron restar credibilidad frente a las instancias judiciales y sobre todo frente a la opinión pública, a los testimonios de Medina. Se acusó entonces a Yidis Medina de hacer llamadas a la familia Uribe Vélez, en particular a su hijo Tomás, para chantajearlo, versión que fue negada por la acusada inicialmente (El Tiempo, 12 de junio de 2008).

La enorme influencia de Uribe Vélez sobre la opinión pública generaba luego de sus señalamientos y de manera automática un manto de dudas sobre sus opositores, sobre los cuales recaía todo el peso de la falta de credibilidad. En marzo de 2008 la popularidad del mandatario alcanzó el 84 por ciento, justo después de que se produjera la crisis diplomática con Ecuador con motivo de la operación en territorio ecuatoriano en la que se dio de baja a alias “Raúl Reyes” (El Tiempo, 12 de marzo de 2008). Con índices tan elevados de popularidad era muy difícil contradecir al presidente, cuya palabra era asumida como una verdad absoluta por parte de un número significativo de colombianos. Igualmente resultaba peligroso quedar ante la opinión pública como un opositor a Uribe debido a la polarización y visión maniquea instalada en una buena parte de la sociedad colombiana, incluyendo grupos armados de extrema derecha que no dudaban en perseguir y en convertir en objetivo de sus acciones a esos “otros” que representaban la antítesis de las ideas de Uribe.

Los efectos inmediatos: el legado de la estigmatización y la polarización política del país

Uno de los efectos generados por la retórica y puesta en escena de AUV fue la polarización de la opinión pública que prácticamente quedó dividida entre uribistas, que constituían una mayoría de los electores, y no uribistas, que asumían una posición crítica frente al fenómeno político que fue (y sigue siendo) AUV. Por parte de los primeros, los uribistas, se llegó incluso a plantear la posibilidad de que Uribe tuviera un tercer periodo como presidente, pero la propuesta finalmente no superó los filtros legales.

La polarización política llegó al extremo de que gran parte de la opinión pública, la que apoyaba a Uribe, pasaba por alto o justificaba la serie de escándalos que envolvían al Gobierno hacia el final de su segundo mandato, bajo la idea de que cualquier otra vía de acción distinta a la planteada por el saliente presidente representaba un retorno a las más temidas condiciones de inseguridad vividas antes de 2002. El accionar terrorista de la guerrilla ayudó a cultivar esos

temores, por lo que el candidato presidencial a quien Uribe designara tendría prácticamente asegurada la elección.

Enmarcadas en esa misma polarización estaban las representaciones estrechas acerca de la diversidad política, ampliamente difundidas entre los seguidores de Uribe para quienes existían solamente “colombianos de bien”, afines a sus ideas, y el resto, que caían bajo la sospecha de ser simpatizantes de la guerrilla o estar ingenuamente desfasados con respecto a lo que debía ser una posición política ideal y de compromiso con Colombia.

Consciente de todo lo anterior, después de la operación que condujo a su liberación luego del largo cautiverio a que la habían sometido las FARC, la misma excandidata presidencial Ingrid Betancourt, desde Francia, en una entrevista para Radio Francia Internacional, al tiempo que reconoció el esfuerzo de Uribe en dicha operación, lanzó un mensaje tanto para el entonces presidente como para el resto del país en el que hizo un llamado a adoptar posturas menos agresivas: “Uribe y no solo Uribe, sino toda Colombia, deben corregir algunas cosas. Hemos alcanzado el punto donde debemos cambiar el vocabulario radical, extremista de odio, de palabras muy fuertes que dañan de manera íntima al ser humano” (El Tiempo, 7 de julio de 2008).

Los medios de comunicación en su mayoría entraron en el juego de la polarización, sobre todo en el segundo mandato de Uribe, y pasaron a ser simples cajas de resonancia del régimen, limitando de manera considerable la diversidad de opiniones. Uno de los diarios de mayor circulación en Colombia, *El Tiempo*, se ajustó fielmente a la línea política oficialista, lo que se explica en gran medida por el hecho de que el grupo propietario del mismo, el grupo Planeta, buscó obtener la licitación para el tercer canal de televisión, razón por la cual debía estar en las mejores relaciones con el Gobierno, siendo muy cuidadoso al informar acerca de algunos de los escándalos que enlodaron a este último, como las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo por miembros del Ejército o las interceptaciones telefónicas ilegales practicadas por organismos de seguridad del Estado.

El Canal televisivo RCN, de propiedad del empresario Carlos Ardila Lule, en sus programas de opinión y noticias mostró una clara tendencia centro-derecha. Uno de los espacios más vistos denominado “La Noche”, presentado por Claudia Gurisatti, evidenciaba una abierta oposición a

cualquier expresión que se pudiera relacionar con la izquierda, al punto incluso de mostrar cierto desdén por temas agudos y que vinculaban al Gobierno de Uribe para concentrarse en las críticas al chavismo. Otro programa llamado “Primera Línea” mostró una línea gobiernista, recurriendo de manera reiterada a voces del uribismo para hablar de temas sensibles de la política del país. Posteriormente Uribe nombró al presentador de dicho programa, Álvaro García, como embajador en Buenos Aires (López, 2014, p. 84).

La polarización y el consenso alrededor de la figura e ideas de Uribe mostró sus peores facetas cuando la discrepancia con los lineamientos oficiales se convertía en estigma que servía de base y justificaba la amenaza y la persecución con consecuencias difíciles de predecir.

A finales de 2004 dos columnistas del diario *El Tiempo*, críticos del Gobierno de Uribe, Daniel Samper Pizano y Óscar Collazos debieron renunciar a su espacio de interacción con los lectores debido a las constantes ofensas y mensajes intimidatorios que a través de la web empezaron a recibir (López, 2014, p. 79).

La presencia del ya mencionado Morris y de otro periodista, Jorge Enrique Botero, miembro de “Colombianos y Colombianas por la Paz”, en el lugar en el que se iban a llevar a cabo unas liberaciones de policías y militares secuestrados por la guerrilla (la ya mencionada entrega de principios de 2009), pero sobre todo la denuncia de Botero ante la prensa internacional de los sobrevuelos de aeronaves de las Fuerzas Armadas con el riesgo (o la intención) de sabotear la entrega de los secuestrados, causó en Uribe una profunda molestia manifestada en sus señalamientos sobre los dos periodistas de ser “cómplices del terrorismo”. Una de las principales consecuencias de la acusación del mandatario fue la apertura de una investigación sobre Morris por parte de la Fiscalía por los cargos de terrorismo, y que finalmente no prosperó.

En un allanamiento llevado a cabo por la Fiscalía General de la Nación sobre las instalaciones del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el principal organismo de seguridad del Estado, se encontró una buena cantidad de documentos que evidenciaban la persecución y el seguimiento ilegal que varios de sus funcionarios venían haciendo sobre periodistas, políticos y distintos opositores al régimen de Uribe, a la que se le llamo eufemísticamente “inteligencia ofensiva”.

Uno de los perseguidos fue precisamente el periodista Morris, quien en un libro de crítica al gobierno de Uribe hace referencia a los intentos por generar terror tanto a él como a su círculo familiar:

En nuestra vida familiar, las llamadas intimidatorias a mi esposa, en su segundo embarazo, buscando llenarla de nervios y se inseguridad, hoy tienen la misma explicación: ‘inteligencia ofensiva’, que buscaba desestabilizarnos [...] Mis hijos menores, de 9 y 5 años, al igual que mi esposa, no se salvaron de la toma de fotografías, llamadas intimidatorias y amenazas (...). (Morris, 2010)

Claudia Julieta Duque fue otra periodista perseguida por el DAS, que padeció junto con su hija los efectos del terror del organismo estatal debido a las investigaciones que quiso desarrollar acerca del asesinato del humorista Jaime Garzón en el año de 1999, en el cual parecían estar involucrados algunos agentes de la institución. El mismo ejercicio de allanamiento por parte de la Fiscalía que sacó a la luz las actividades de persecución contra Morris permitió conocer detalles del hostigamiento e intimidación que desde el DAS se hicieron entre 2001 y 2004 contra la periodista (López, 2014, p. 230-232). Duque también recibió los señalamientos de Uribe Vélez luego de que, junto con otros periodistas publicara en 2011 un artículo sobre el caso de las interceptaciones ilegales hechas desde el DAS. De ella y de sus colegas periodistas el entonces presidente dijo que eran “personas con grandes indicios de ser simpatizantes del terrorismo”, que se ocupaban de “manipular y distorsionar la realidad y de dañar la imagen de su gobierno”, y de manera particular dijo sobre Duque que pertenecía “a un colectivo de abogados que defienden a las FARC” (Semana, 20 de febrero de 2012).

Estigmatización y opinión pública pos Uribe

Desde su lugar actual como líder de la oposición, Uribe mantiene una actitud acusadora frente a cualquier muestra de supuesta debilidad frente a las FARC, alimentando constantemente la marcada segregación entre “colombianos de bien” y el resto, ubicando cada grupo en su maniquea percepción de la realidad.

El ya citado caso de Claudia Julieta Duque, quien fue acosada por agentes del DAS en los años 2003 y 2004 por sus investigaciones que vinculaban a agentes de esta institución con el asesinato de Jaime Garzón no concluyó con la disolución de organismo de seguridad ni con el final del régimen de Uribe que lo utilizó como su arma de espionaje sobre cualquier forma de oposición. En el año 2013 Duque denunció nuevas forma de acoso a través de llamadas sospechosas y de la actitud de personas extrañas que habían estado tomando fotografías a su hija, todo lo cual se presentó luego de que la Fiscalía dictara medida de aseguramiento contra siete exfuncionarios del DAS implicados en seguimientos ilegales que se habían hecho sobre la periodista y su familia cerca de diez años atrás (El Tiempo, 12 de abril de 2013).

Si bien es cierto que una parte significativa de la opinión pública en Colombia miró con desagrado la inhabilidad proferida por la Procuraduría General sobre Gustavo Petro, alcalde de Bogotá y uno de los más fuertes críticos del Gobierno de Uribe, durante cuya vigencia ejerció como parlamentario, por considerar dicha sanción exagerada, otro importante sector de esa misma opinión pública, principalmente la que se indentificaba con el uribismo, lo vio como un triunfo. Esta última posición se explica por las representaciones que ayudó a construir Uribe durante su gobierno acerca de los opositores como simpatizantes de la guerrilla de las FARC, a lo cual se sumaba el pasado guerrillero de Petro en otro grupo insurgente, el M-19, a pesar de que el alcalde de Bogotá había mostrado un absoluto distanciamiento frente a la posición beligerante de las FARC⁶.

Incluso la asistente personal de Uribe durante su gobierno, Alicia Arango, de quien se llegó a decir que manejaba la agenda del país y que luego de la salida de Uribe de la presidencia asumió la dirección del nuevo partido creado en torno al expresidente, el Puro Centro Democrático, manifestó su distanciamiento de este último debido a la adhesión irrestricta y acrítica de algunos sectores del mismo. Señaló en su cuenta de twitter que “Parte de mis diferencias con el Centro Democrático (CD) es que no acepto el fanatismo, hace daño y desdibuja a Uribe. Lo hacen para beneficio político y personal” (Semana, 17 de marzo de 2015).

⁶ Algunos sectores políticos vieron la destitución de Petro una maniobra del Uribismo, principalmente de uno de los ministros más representativos que tuvo Uribe, Fernando Londoño, actuando en connivencia con el Procurador Ordoñez, quien se ha mostrado como un hombre muy cercano a las ideas de Uribe. Algunas referencias a dichas versiones se encuentran en: “Destitución de Petro: ‘Teoría de conspiración es fantasiosa.’” (Semana, 16 de diciembre de 2013).

Conclusiones

La comunicación es una forma de representación simbólica de la realidad, pero también es el medio de construcción de significados compartidos por la opinión pública sobre ciertos asuntos de interés general. Es así como a partir del discurso los actores políticos y el gobierno pueden difundir y crear imaginarios populares que legitiman sus acciones, siendo dichos imaginarios elementos fundamentales para llegar al poder y mantenerse en él. El caso más representativo en las últimas décadas en Colombia de este tipo de prácticas políticas fue el de Álvaro Uribe (2002-2010), quien se caracterizó por la construcción de imaginarios cargados de estigmas sobre la oposición y sobre distintas manifestaciones de crítica sobre su gobierno, lanzados en medio de un ambiente propio de un conflicto interno radicalizado.

Las formas de estigmatización durante el gobierno de Uribe no constituyeron una práctica novedosa, pues se enmarcan en las lógicas de violencia tradicionales de un país con un conflicto de profundas raíces socio-políticas y económicas, que han configurado formas de *violencia política* a través de las cuales los grupos en el poder se han fortalecido y han limitado, cuando no neutralizado o anulado, la capacidad de acción de sus opositores. De todo ello es prueba la violencia que tuvo lugar a mediados del siglo XX entre conservadores y liberales, y también los crímenes contra los miembros del partido político Unión Patriótica.

El ascenso de Uribe con un discurso radical de “mano dura” frente a las guerrillas se vio facilitado por la animadversión generada en gran parte de la opinión pública colombiana debido al fracaso en los diálogos con la administración anterior, la de Pastrana (1998-2002) y al incremento de las acciones delincuenciales de los grupos insurgentes, que arreciaron en ataques tanto contra la Fuerza Pública como contra la población civil en los últimos años del siglo XX y principios del XXI

Las soluciones propuestas por la política de Seguridad Democrática de Uribe dieron lugar a una opinión pública con altos niveles de aceptación del discurso del entonces presidente, basado en altas dosis de nacionalismo y radicalización, lo que dio lugar a una percepción maniquea en la

que estar en desacuerdo con el Gobierno implicaba automáticamente una proximidad ideológica o simpatía con las FARC. De esta forma AUV desarrolló una estrategia de *estigmatización política* de sus opositores y detractores, así como de aquellos que de alguna manera se mostraban inconformes con sus políticas, adoptada de manera acrítica por muchos de sus seguidores.

Entre las voces críticas estigmatizadas se pueden encontrar, por un lado, a la oposición organizada, que incluía a los partidos políticos Liberal y Polo Democrático Alternativo, de los cuales una buena cantidad de militantes ejercieron permanentemente como críticos y contradictores de Uribe; por el otro, una oposición más bien ficticia, construida por el propio gobierno al crear y difundir imaginarios generalizadores sobre organizaciones no gubernamentales, de protección de Derechos Humanos, y también periodistas, políticos, ex presidentes e incluso mandatarios de países como Venezuela y Ecuador.

El medio para la estigmatización a estos grupos e individuos fue un discurso con frases de desacreditación y señalamiento negativo sobre cualquier hecho o posición crítica de todo aquel que discrepara de la línea oficial. A la credibilidad de dicho discurso ayudó además la imagen de cercanía con el pueblo de Uribe y el recurso de la reiteración con temas como el nacionalismo y el patriotismo, así como el uso constante de valoraciones en primera persona con alta connotación extrema de amigos enemigos (nosotros, los buenos - ellos, enemigos).

El resultado y la herencia fue el fortalecimiento de la figura mesiánica de Uribe y la consolidación de un entorno político altamente polarizado que aún hoy se mantiene, y que se constituye como una fuente de *violencia política*, bien sea por la negación consciente de la pluralidad ideológica en el país o bien por el accionar de grupos armados de extrema derecha contra opositores, líderes sociales o todo lo que representara alguna forma de alteridad indeseada.

Referencias Bibliográficas

Álvarez, G. (2011). *Cóndores no entierran todos los días*. Bogotá: Editorial Grijalbo.

Carvajal, Alejandro. (2005). *Pax Colombiana: Un análisis del discurso del presidente Álvaro Uribe Vélez sobre la paz entre agosto de 2002 y agosto de 2003*. Cali: Perspectivas Internacionales. Ciencias políticas y relaciones internacionales.

Coronell, D. (26 de mayo de 2012). El Rompecabezas. *Semana*. Recuperado de: <http://www.semana.com/opinion/articulo/el-rompecabezas/258484-3>

El Espectador. (3 de febrero de 2009). Juan Manuel Santos acusó a Hollman Morris de hacerle apología al delito. *El Espectador*. Recuperado de: <http://www.elespectador.com/audio-juan-manuel-santos-acuso-hollman-morris-de-hacerle-apologia-al-delito>

El Tiempo. (5 de octubre de 1999). Once Municipios sin Dios sin Ley. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-947902>

El Tiempo. (4 de febrero de 2007). Polo Democrático replica a Uribe por calificar de 'terroristas de traje civil' a ex miembros de M-19. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3426195>

El Tiempo. (31 de enero de 2008). Human Rights Watch acusa a Álvaro Uribe de “socavar” a la Corte Suprema de Justicia. *El Tiempo*. Recuperado de: Aparece en <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-3941046>

El Tiempo. (12 de marzo de 2008). Popularidad del presidente Álvaro Uribe alcanzó nuevo récord durante la crisis diplomática. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4007494>

El Tiempo. (7 de julio de 2008). Mitigar su lenguaje de odio” pidió Ingrid Betancourt al presidente Álvaro Uribe y a Colombia. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4366081>

El Tiempo. (12 de junio de 2008). Procuraduría sabría la verdad sobre 'chantaje' de Yidis a familiares del presidente Álvaro Uribe. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4265068>

El Tiempo. (27 de junio de 2008). Cronología de las peleas entre el presidente Álvaro Uribe y la Corte Suprema de Justicia. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4352521>

El Tiempo. (11 de agosto de 2008). Presidente Álvaro Uribe acusó a senadores Gustavo Petro y Piedad Córdoba de manipular testigos. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4440142>

El Tiempo. (12 de agosto de 2008). Corte Suprema se pronunciará en la tarde sobre señalamientos de senadora Gutiérrez y Álvaro Uribe. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4442153>

El Tiempo. (12 de agosto de 2008). Corte Suprema se pronunciará en la tarde sobre señalamientos de senadora Gutiérrez y Álvaro Uribe. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4442153>

El Tiempo. (12 de agosto de 2008). Respeto a la Corte Suprema le pide a César Gaviria al presidente Álvaro Uribe. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4449226>

El Tiempo. (27 de agosto de 2008). Los enfrentamientos entre el liberalismo y el presidente Álvaro Uribe continúan. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4469983>

El Tiempo. (5 de septiembre de 2008). Álvaro Uribe se reunirá nuevamente con George Bush en la Casa Blanca el 20 de septiembre. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4502710>

El Tiempo. (6 de septiembre de 2008). Nuevas críticas lanzó el presidente Álvaro Uribe contra la Corte Suprema de Justicia. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4504860>

El Tiempo. (14 de octubre de 2008). Un indígena muerto y más de 30 heridos en enfrentamientos entre indígenas y policías en Colombia. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4601377>

El Tiempo. (28 de noviembre de 2008). Apoyo ganadero a nueva reelección de Álvaro Uribe. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-3210417>

El Tiempo. (6 de diciembre de 2008). Texto completo de la intervención del presidente Uribe al inicio del Consejo Comunal. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-4709222>

El Tiempo. (12 de abril de 2013). Periodista Claudia Julieta Duque denunció nuevos seguimientos. *El Tiempo*. Recuperado de: <http://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-12738800>

López, F. (2014). *Las ficciones del poder. Patriotismo, medios de comunicación y reorientación afectiva de los colombianos bajo Uribe Vélez (2002-2010)*. Bogotá: IEPRI.

Morris, H. En Bejarano, R y Coronell, D, y otros. (2010). Las perlas uribistas. Reveladora radiografía del gobierno de Álvaro Uribe, Random House Mondadori, Bogotá.

Oquist, P. (1978). *Violencia, conflicto y política en Colombia*. Bogotá: Instituto de Estudios Colombianos.

Redacción Política. (31 de mayo de 2008). Al aire, Presidente. *El Espectador*, p. 10.

Semana. (17 de marzo de 2015). La andanada de Alicia Arango contra el fanatismo del CD. *Semana*. Recuperado de: <http://www.semana.com/confidenciales-semanacom/articulo/la-andanada-de-alicia-arango-contra-el-fanatismo-del-cd/421326-3>

Semana. (27 de octubre de 2010). Procuraduría ratifica destitución e inhabilidad a Piedad Córdoba. *Semana*. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/procuraduria-ratifica-destitucion-inhabilidad-piedad-cordoba/123783-3>

Semana. (16 de diciembre de 2013). Destitución de Petro, Pacho Santos desmiente complot. *Semana*. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/destitucion-de-petro-pacho-santos-desmiente-complot/368663-3>

Semana. (20 de febrero de 2012). Uribe deberá responder por injuria y calumnia contra tres periodistas. *Semana*. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/uribe-debera-responder-injuria-calumnia-contra-tres-periodistas/253758-3>

Semana. (13 de enero de 2014). Procurador confirma decisión de Petro. *Semana*. Recuperado de: <http://www.semana.com/nacion/articulo/procurador-confirma-la-destitucion-de-gustavo-petro/370775-3>

Uribe, T., y Uribe, J. (28 de mayo de 2012). Respuestas de Tomás y Jerónimo Uribe a columna de Coronell. *Semana*. Recuperado

de: <http://www.semana.com/opinion/articulo/respuesta-tomas-jeronimo-uribe-columna-coronell/258593-3>